

Santiago, once de abril de dos mil veinticinco.

A los escritos folio 5 y 8: a todo, téngase presente y a sus antecedentes

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, a excepción de sus fundamentos cuarto a sexto, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar, además, presente:

1º) Que la controversia planteada radica en determinar si la negativa *in limine* a convocar a una audiencia de cautela de garantías bajo el pretexto de encontrarse firme la sentencia condenatoria, implica una vulneración o restricción a la libertad personal o seguridad individual del amparado, en los términos previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

2º) Que al efecto, resulta atinente recordar las atribuciones que la ley entrega al Juzgado de Garantía. Así, dentro del catálogo de asuntos que el artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales pone bajo competencia del citado tribunal se encuentra aquella destinada “asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes en el proceso penal, de acuerdo a la ley procesal penal” (letra a)).

Por su parte, el artículo 10 del Código Procesal Penal dispone, en su inciso primero que: “En cualquiera etapa del procedimiento en que el juez de garantía estimare que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, adoptará, de oficio o a petición de parte, las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio....”. Luego, la parte final del inciso segundo, prescribe que



“Con el mérito de los antecedentes reunidos y de lo que en dicha audiencia se expusiere, resolverá la continuación del procedimiento o decretará el sobreseimiento temporal del mismo”.

3°) Que como se observa, la disposición transcrita fija ciertos lineamientos importantes de resaltar. Así, la cautela de garantías se erige como un mecanismo de protección de los derechos provenientes de las garantías judiciales reconocidas en todo el arco del ordenamiento jurídico (lo que incluye los tratados internacionales reconocidos y vigentes en Chile).

Luego, es tal la importancia que reviste esta herramienta tutelar que el legislador explícitamente invistió al juez de facultades oficiosas para darle mayor eficacia, constituyendo una clara excepción a la regla de pasividad judicial que predomina en el enjuiciamiento penal.

Enseguida, desde la perspectiva de su extensión procesal, el precepto discurre que su aplicación se extiende a cualquier fase del procedimiento, por lo que, conforme lo dispuesto en el artículo 7 inciso primero del código adjetivo, la cautela de garantías también resulta predicable y reclamable durante el momento de la ejecución.

4°) Que una vez despejado que la competencia del Juez de Garantía para la cautela de garantías incluye la fase de ejecución, es necesario a continuación analizar si el trasfondo del asunto puesto en conocimiento de esta Corte por la vía de la acción constitucional de amparo vulnera o restringe la libertad personal del amparado. Para estos efectos, es dable señalar que si bien en el libelo de amparo se hace recurrente alusión a la infracción del derecho de defensa técnica, cuestión que, en principio, podría verse distanciado del ámbito de la mentada acción



constitucional, lo cierto es que en la incidencia expuesta puede llegar a tener un grado de repercusión en la garantía tutelada vía amparo. En efecto, en caso de ser efectivo que la voluntad del amparado fue la de ser asistido por la defensora privada Paulina Llanos en la audiencia de preparación de juicio oral, toda vez que fue con ésta con quien se habría consensuado la estrategia procesal a implementar (dentro de la que se reconocía como una eventual alternativa, la posibilidad de arribar a un procedimiento abreviado), podría, entonces, llegar a resultar lesivo a la libertad personal tanto la adscripción al citado procedimiento como igualmente los términos negociados entre fiscal y el defensor público que asistió al amparado, máxime si presuntamente este último ya no contaba con la confianza de su cliente, al haber contratado los servicios jurídicos de otra letrada.

5°) Que, igualmente, es menester señalar que la circunstancia de encontrarse firme la sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado no es obstáculo para celebrar una audiencia de cautela de garantías con el fin de repasar si se cumplieron o no con todas formas indispensables para la celebración de tal comparendo y ulterior condena impuesta. Lo anterior, en el entendido que, en el hipotético caso de no haberse cumplido con los presupuestos procesales esenciales para una adecuada representación judicial del amparado con motivo de una presunta negligencia o actuación imputable al tribunal, podría levantarse una alegación asociada a una cosa juzgada aparente, máxime si los alcances de la incidencia denunciada dificultarían construir un derrotero por la vía de la acción de revisión.

6°) Que, como corolario a lo expuesto *supra*, habiendo el Juzgado de Garantía declinado conocer un asunto expresamente sometido a su competencia,



a lo que se añade que dicha negativa pudo llegar a tener incidencia directa en una restricción a la libertad personal del amparado, es que se acogerá la acción constitucional de amparo impetrada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se revoca** la sentencia apelada de veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, pronunciada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en el ingreso N°82-2025 y en su lugar se dispone que **se acoge** el recurso de amparo deducido en favor de Pedro Villarroel Triviño y, en consecuencia, se ordena al Juzgado de Garantía de Castro convocar a la brevedad a los intervinientes a audiencia de cautela de garantías, con el fin de escuchar y resolver la petición entablada por la defensa del amparado conforme a derecho.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Rol Corte 11211-2025.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. y los Abogados (as) Integrantes Pía Verena Tavorari G., Eduardo Nelson Gandulfo R. Santiago, once de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a once de abril de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

